
PAZ Y REHABILITACIÓN POSBÉLICA EN ANGOLA: OPORTUNIDADES Y RIESGOS DE UN PROCESO ATÍPICO¹

KARLOS PÉREZ DE ARMIÑO*

RESUMEN

Este artículo analiza el actual contexto de rehabilitación posbélica en que vive Angola, tras la conclusión de la guerra civil en 2002. El artículo destaca tanto las ventanas de oportunidad como los numerosos desafíos existentes en el país para construir una paz estable, un sistema político inclusivo y un modelo de desarrollo humano para la mayoría. Se estima que la perpetuación de grandes desequilibrios socioeconómicos y la insatisfactoria evolución política de estos últimos años amenazan el logro de una reconciliación efectiva y pueden causar en el futuro tensiones y nuevas formas de conflicto.

ABSTRACT

This paper analyses the current post-war rehabilitation context of Angola, after the end of its civil war in 2002. The paper emphasizes both the windows of opportunities and the many challenges and threats existing in regard to the goal of building a sustainable peace, an inclusive political system and a human development model for the majority of the population. As a conclusion, it is predicted that continuing of serious socio-economic inequalities and the unsatisfactory political evolution over these last years threaten the chances of an effective reconciliation and could cause further tension and conflict in the future.

1. Los contenidos de este artículo se derivan de la realización del proyecto de investigación titulado *Seguridad humana, desarrollo humano y gobernabilidad como claves de los procesos de reconciliación y rehabilitación posbélicas*, financiado por la Universidad del País Vasco. Ref: 1/UPV 00111.323-H-15866/2004. Igualmente, son resultado del trabajo de campo realizado por el autor en Angola durante los veranos de 2001 y 2004. El autor agradece la colaboración prestada por las múltiples personas y organizaciones que fueron entrevistadas o proporcionaron apoyo en dichas visitas.

* Profesor Titular de Relaciones Internacionales. Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Investigador de HEGOA-Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional.

RÉSUMÉ

Cet article analyse l'actuel contexte de réadaptation post-guerre dans lequel vit l'Angola, après la fin de la guerre civile en 2002. L'article souligne les opportunités et les nombreux défis existants dans le pays pour construire une paix stable, un système politique inclusif et un modèle de développement humain pour la majorité de la population. On estime que la perpétuation de grands déséquilibres socio-économiques et l'évolution politique peu satisfaisante de ces dernières années menacent la réalisation d'une réconciliation effective et peuvent causer dans le futur des tensions et de nouvelles formes de conflit.

Introducción

Tras varias décadas de guerras, Angola vive desde 2002 en un contexto de paz y reconstrucción posbélica. Se trata de un escenario complejo, en gran medida porque el final de la guerra ha permitido retomar, aunque de forma poco satisfactoria, cuatro procesos de transición iniciados a comienzos de los años 90 y que el resurgimiento de las hostilidades (entre 1992-1994 y, después, a partir de 1998) frenó y distorsionó. Esos procesos de transición son los siguientes: de la guerra a la paz y la reconciliación; de la emergencia humanitaria a la rehabilitación y el desarrollo; de un gobierno autoritario hacia una democracia pluralista; y de una economía centralizada a otra de libre mercado (Munslow, 1999:552). Cada uno de estos cuatro procesos de cambio que afronta el país, y que han recibido un nuevo impulso desde el final de la guerra, supone en sí mismo un gran desafío y una fuente de incertidumbres.

El fin de las hostilidades, sin lugar a dudas, conllevó algunas mejoras evidentes de forma inmediata, por ejemplo en materia de comunicaciones y de acceso a lugares antes aislados. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, los “dividendos de la paz”, o las mejoras socioeconómicas que se esperaba que llegaran con ésta, se están revelando decepcionantes por su lentitud e insuficiencia (Ferreira, 2005). Además, los procesos de pacificación y reconstrucción se ven amenazados por diversos focos de riesgo y tensión, debido a factores como: una pobreza extendida y una falta generalizada de acceso a los servicios sociales básicos; la persistencia aún de contextos de emergencia humanitaria en diferentes lugares; unos enormes y crecientes desequilibrios socioeconómicos; y las grandes perversiones del sistema político de gobernabilidad.

En efecto, Angola se encuentra en un momento crucial de su historia, en el que deben redefinirse su modelo de desarrollo y su modelo político. Lamentablemente, diferentes desequilibrios estructurales, tendencias y actitudes hacen pensar que no se avanza hacia un desarrollo humano equitativo que garantice un mínimo bienestar de todos los angoleños, y tampoco (al menos con paso firme y claro) hacia un sistema político democrático e integrador de las diferentes sensibilidades ideológicas, étnicas y territoriales.

Dadas las especificidades del país, en particular su gran riqueza petrolífera, en pocos lugares como en éste es tan evidente la interrelación existente entre los problemas políticos de mala gobernación (corrupción, falta de transparencia, gestión del poder al servicio del enriquecimiento de la élite y no de las necesidades sociales, etc.) y la falta de avances hacia un desarrollo humano para todos.

Por otro lado, es importante subrayar la importancia que tanto el país como el proceso que está viviendo ahora encierran para el futuro del África Subsahariana en su conjunto. En efecto, Angola, con abundante petróleo entre otros recursos naturales y su poderoso ejército, tiene el potencial para convertirse en una de las principales potencias económicas, políticas y militares del continente, que además ha cobrado ya una apreciable importancia geopolítica, especialmente para los EE.UU. De este modo, el proceso de reconstrucción y consolidación de la paz que vive será influyente allende de sus fronteras.

Cronología de los principales acontecimientos

1957	Comienzo de la guerra de independencia (hasta 1975)
1975, junio	Comienzo de la guerra civil
1975, noviembre	Independencia de Portugal
1989	Ingreso en el Banco Mundial y el FMI
1991, mayo	Acuerdos de Bicesse y fin de la guerra del Mato
1992, septiembre	Últimas elecciones y comienzo de la guerra de las ciudades (hasta 1994)
1994, noviembre	Protocolo de Paz de Lusaka
1995, septiembre	Conferencia de Donantes de Bruselas
1998, diciembre	Reapertura plena de la última guerra (hasta 2001)
1999, febrero	Fin del mandato de Misión de Observación de la ONU
1999, octubre	Caída de Bailundo y Andulo, principales plazas de UNITA
2000, febrero	Publicación del informe Fowler sobre fortalecimiento de sanciones de la ONU contra UNITA
2002, febrero	Muerte de Savimbi
2002, abril	Memorando de Entendimiento de Luena
2002, agosto	Disolución de las Fuerzas Militares de UNITA.

Así pues, el principal objetivo de este artículo es analizar los principales desafíos y dificultades del país en este período crítico de su historia, así como también las ventanas de oportunidad de las que dispone para que el proceso de rehabilitación posbélica prospere y genere un escenario de paz estable y desarrollo humano para todos. Para ello, comenzaremos realizando un breve recorrido histórico, observando algunas de las claves de los conflictos que han asolado al país. A continuación, valoraremos el grave impacto que la guerra tuvo, para esbozar después la situación que el país afronta actualmente en diferentes ámbitos. En particular, analizaremos diversos problemas y desequilibrios que parecen estar lastrando los procesos de reconciliación y reconstrucción.

Las guerras de Angola

Angola ha vivido en conflicto armado casi continuado durante más de cuatro décadas. En realidad, se ha tratado de una sucesión de cuatro guerras con características propias: a) la guerra de la independencia (1957-1975); b) la guerra del *mato* (bosque) (1975-1991); c) la guerra de las ciudades (1992-1994); y d) la última guerra (1998-2002).

La primera de ellas comenzó a finales de los años 50 con el objetivo de arrancar la independencia a Portugal. Fue librada por tres organizaciones nacionalistas enfrentadas entre sí, que disponían de sus propias bases étnico-regionales: el MPLA (Movimiento Popular de Liberación de Angola), el FNLA (Frente Nacional de Liberación de Angola) y la UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola).

La independencia tuvo lugar de modo caótico, con un precipitado abandono de las autoridades y colonos portugueses sin traspasar el poder a nadie. De este modo, las tres organizaciones iniciaron una lucha por el poder. El MPLA logró el control de Luanda con el apoyo de miles de soldados cubanos y material militar soviético, proclamando la República Popular de Angola. Por su parte, la UNITA y el FNLA declararon la independencia de la República Democrática de Angola, con sede en Huambo. Aunque el FNLA pronto se disolvió, la UNITA continuó su guerra con el MPLA gracias al apoyo de Sudáfrica y los EE.UU. Se conformó así un conflicto característico de la Guerra Fría, con un contendiente aliado del bloque socialista y otro del capitalista.

Algunos autores interpretan que el conflicto comenzó precisamente motivado por este factor externo, la división bipolar de la Guerra Fría, y concretamente

debido a la opción que tomó EE.UU. de organizar una guerra contra el Gobierno del MPLA, el cual tuvo así que reclamar apoyo cubano y soviético. Otros, sin embargo, entienden que el factor inicial fue la división interna entre diferentes organizaciones nacionalistas, y que la conformación de alianzas internacionales fue posterior. El asunto es relevante, pues determina la naturaleza del conflicto y sus posibilidades de solución. En todo caso, como destaca Messiant (2004), una característica del conflicto en Angola ha sido el papel crucial desempeñado en él por los intereses estratégicos extranjeros, tanto regionales como internacionales, lo que ayuda a explicar su ferocidad.

A finales de los años 80, el país inició algunas reformas de cierta liberalización de la economía, integrándose en 1989 en el FMI y el Banco Mundial. La conclusión de la Guerra Fría facilitó que en 1991 se llevaran a cabo varias reformas políticas aperturistas (instauración de un sistema pluripartidista, legalización de asociaciones y medios de comunicación independientes, etc.), los Acuerdos de Paz de Bicesse, supervisados por una operación de paz de la ONU, y, finalmente, las elecciones de 1992.

Tras su derrota en las urnas, la UNITA rechazó inmediatamente los resultados y dio inicio a la “guerra de las ciudades”, caracterizada por el sitio y bombardeo de éstas por esa organización. La reapertura del conflicto dio lugar a una nueva crisis humanitaria, una nueva oleada de desplazados internos (sobre todo hacia la capital) y la destrucción de gran parte de las infraestructuras. Pero también tuvo consecuencias en el plano político: a partir aproximadamente de 1993, los EE.UU. dejaron de sostener a la UNITA, pasando a legitimar y apoyar al Gobierno del MPLA, como hicieron también las Naciones Unidas y otros Gobiernos. El Gobierno, no en vano, controlaba los pozos de petróleo en la costa. La UNITA, por su parte, se financiaba con la explotación de diamantes en provincias del interior.

En 1994 se firmaron los Acuerdos de Paz de Lusaka, y desde entonces hasta la actualidad ha existido un Gobierno de Unidad Nacional con la participación de algunos ministros de la UNITA. Aunque las Naciones Unidas fueron incapaces de hacer cumplir lo pactado a las partes, en especial a la UNITA. Después de cuatro años de cierta paz, cargada de incumplimientos y tensiones, la guerra estalló de nuevo en diciembre de 1998. En esta cuarta guerra, la UNITA logró al principio un importante control territorial, pero pronto inició un proceso de debilitamiento económico, geopolítico y militar, debido a dos factores. Por un lado, la pérdida de sus principales apoyos internacionales y las sanciones que el Consejo de Seguridad le impuso desde 1998, como la que prohibía la comercialización de los diamantes de las zonas que controlaba, lo que redujo su principal vía de financiación, o la prohibición para venderle

armas. Por otro, la progresiva ventaja lograda por el ejército, que conquistó en 1999 las principales bases territoriales tradicionales de la UNITA así como, progresivamente, las zonas diamantíferas. Desde ese año, de una guerra convencional entre ejércitos que controlaban partes del territorio se pasó a una guerra de guerrillas, con prácticas cada vez más destructivas, crueles y lesivas para la población. El resultado fue una nueva crisis humanitaria y el incremento del número de desplazados a unos cuatro millones.

Se han dado diferentes interpretaciones sobre las razones por las que el conflicto armado perduró en Angola, una vez concluida ya la confrontación ideológica de la Guerra Fría. Entre ellas se mencionan las rivalidades entre grupos étnico-territoriales, los sentimientos de agravio y discriminación de algunos de éstos, e incluso la animadversión personal entre el presidente Dos Santos y el líder de la UNITA, Savimbi. Sin embargo, las dos interpretaciones con más peso se centran, por un lado, en la lucha por el control de los recursos naturales del país; así como, por otro lado, como argumenta Hodges (2001:169, 173), en la justificación que el contexto de guerra proporcionaba para congelar la apertura democratizadora iniciada a comienzos de los 90 y preservar los intereses y el acelerado enriquecimiento de la élite en el poder, gracias a la represión, el clientelismo, la opacidad y la corrupción.

A pesar de la creciente carencia de medios de la UNITA, a principios de esta década muchos observadores pensaban que, debido a su alta disciplina, su conocimiento del terreno y su pericia como guerrilla rural, era casi imposible una victoria militar del ejército. Además, desde la sociedad civil y las iglesias se apostaba por la negociación entre las partes como única vía para una paz duradera e integradora. Sin embargo, la opción perseguida por el Gobierno no fue esa, sino la de alcanzar una victoria militar².

Pero el fin de la guerra llegó de forma muy diferente a lo que la mayoría esperaba, con la muerte de Savimbi, el 22 de febrero de 2002, en la provincia de Moxico a manos del ejército. Inmediatamente se iniciaron negociaciones entre los jefes militares de ambos lados (ni siquiera el liderazgo político de UNITA fue invitado), para retomar las disposiciones del antiguo Protocolo de Lusaka de 1994. Tales negociaciones se realizaron a puerta cerrada, por la negativa del Gobierno a que asistieran otros actores (otros partidos, medios de comunicación, Iglesias, organizaciones de la sociedad civil, Naciones Unidas o los países de la troika que habían velado por el acuerdo de Lusaka). Por ello,

2. Como subraya Messiant (2004), la comunidad internacional "real", compuesta por las grandes potencias y las multinacionales, hacía tiempo que había apostado no sólo por el gobierno, sino también, de forma tácita, por la opción militar y por el abandono de todo intento de negociación.

diversas voces expresaron su sospecha de que lo que se presentó como un acuerdo de paz conciliatorio fuera en realidad la rendición militar de una UNITA rehén del Gobierno. El enfoque adoptado consistió en abordar las cuestiones militares, dejando las políticas para más adelante³. A la UNITA se le concedieron una serie de puestos en embajadas y gobiernos provinciales. Además, según fuentes no oficiales, a los líderes de esa organización y sus empresas también parece haberseles concedido el control de cinco zonas diamantíferas⁴.

Finalmente, la paz se firmó el 4 de abril de 2002 entre los dos ejércitos, mediante el Memorando de Entendimiento de Luena, que formalmente es un suplemento al Protocolo de Lusaka de 1994. El Memorando establece: a) la aprobación de una ley de amnistía para todos los crímenes cometidos durante el conflicto, que fue inmediatamente proclamada; b) la integración de 5.047 excombatientes de UNITA en las Fuerzas Armadas de Angola y en la policía nacional; y c) la desmovilización de las demás Fuerzas Militares de UNITA (FMU), de forma que el 2 de agosto de 2002 las FMU dejaron de existir. En otro compromiso aparte, el Gobierno aceptó también la desmovilización, a medio plazo, de 33.000 miembros de las Fuerzas Armadas.

El fin de la guerra llegó cuando la situación estaba madura para la victoria del Gobierno, por cuanto el contexto geopolítico le era ya totalmente propicio y la UNITA había perdido sus principales apoyos (EE.UU., R. D. del Congo, etc.). El fin del conflicto, en definitiva, ha representado la victoria del Gobierno, el incremento del poder de éste y de las elites sociales que le sustentan, así como el fracaso de las propuestas de una paz consensuada y resultante de afrontar los problemas de fondo del país (modelo político, desequilibrios etno-regionales, etc.). Por el contrario, tales problemas no se han discutido y la sociedad civil ha sido de nuevo excluida del proceso de paz. Esta forma de conseguir la paz, sin un acuerdo fruto de un proceso de negociación (como ocurrió por ejemplo en Mozambique), está condicionando fuertemente la orientación del actual proceso de rehabilitación del país (Meijer, 2004).

Por otro lado, cabe recordar que el citado acuerdo de paz de Luena no afecta a otra duradera guerra, la que se libra en Cabinda entre el ejército y el FLEC (Frente de Liberación del Enclave de Cabinda) y otras organizaciones locales, que luchan desde hace tres décadas por la independencia de este pequeño

3. Un interesante análisis sobre el proceso conducente al Memorando de Luena y las características de éste puede verse en Griffiths (2004).

4. *AfricaMonitor Intelligence*, nº 10, 13 de abril de 2005, citado en Ferreira (2005:518).

enclave costero situado entre los dos Congos, muy rico en petróleo y separado geográficamente del resto del país⁵.

Las secuelas de la guerra: crisis, destrucción y polarización social

La guerra de Angola ha sido una de las más crueles y devastadoras de las últimas décadas, tanto en términos humanitarios como socioeconómicos. Se estima que causó la muerte de más de un millón de personas (más del 10% de la población), generó una enorme destrucción en todos los órdenes, agudizó diversos desequilibrios estructurales (económicos, demográficos, territoriales, etc.) y provocó un grave deterioro del bienestar de la mayoría de la población.

Comencemos por el impacto económico. Con la excepción de un único sector en auge, el petrolífero, y, en parte, del diamantífero, la economía del país prácticamente se colapsó durante la guerra. Esto fue resultado de factores como el desplazamiento masivo de población, la inaccesibilidad de una amplia parte del territorio (sólo la capital, la costa y la mayoría de las ciudades estaban efectivamente controladas por el Estado), así como la destrucción y minado de gran parte de las infraestructuras físicas. No en vano, Angola es uno de los países que más minas alberga (6 o 7 millones, según el Gobierno y la ONU), las cuales han generado un pernicioso impacto humano (unos 80.000 lisiados) y económico (dificultan la agricultura y la ganadería, el transporte y otras actividades).

Todas estas circunstancias provocaron una parálisis de la agricultura (salvo la de subsistencia familiar), de la escasa actividad industrial, de la minería (salvo la extracción artesanal de diamantes, durante largo tiempo controlada por la UNITA), así como del comercio campo-ciudad. Como resultado, al concluir la guerra en 2002, el país apenas tenía capacidad para producir otra cosa que petróleo y diamantes, debiéndose importar prácticamente todo lo demás.

La agricultura, floreciente en la época colonial, se ha visto gravemente mermada y reducida a prácticas de subsistencia familiar, como consecuencia de diversos problemas: las dificultades de acceso a la tierra por las minas antipersona o la inseguridad, la pérdida de insumos (ganado, herramientas, semillas),

5. El 12 de julio de 2006, el Foro Cabindés para el Diálogo firmó un acuerdo de paz con el Gobierno angoleño contemplando diversas medidas (un estatus especial para la provincia, desmilitarización de la misma, desmovilización y reintegración de combatientes, etc.), pero no ha sido avalado por el FLEC y otras organizaciones.

los desplazamientos masivos de población hacia las ciudades, la falta de atención por el Estado, la destrucción de las infraestructuras, la quiebra de los servicios básicos en las zonas rurales, etc. Como consecuencia, apenas genera excedentes alimentarios para exportarlos a las ciudades. A principios de esta década, el país sólo cubría la mitad de sus necesidades de cereal.

Destruídos o paralizados casi todos los demás sectores, el petrolífero ha adquirido un peso desproporcionado en la economía y en los ingresos del Estado, suponiendo un 80% de los mismos y un 90% de las exportaciones. Con una producción de 1,4 millones de barriles diarios en 2005 (que aumentarán a 2,5 millones en 2015), Angola es el segundo mayor productor de África y el octavo mayor proveedor de EE.UU., al cual exporta el 40% de su producción (un 30% destinada a China). El aumento de la producción en la última década, acompañado de la escalada de los precios internacionales, hace que el Estado angoleño sea uno de los que cuenta con mayores ganancias fiscales y de divisas en África. No obstante, como ocurre en otros países, el modelo de desarrollo basado en el petróleo se caracteriza por grandes distorsiones y desigualdades: es un sector geográficamente concentrado en la costa norte del país, constituye una economía de enclave desconectada del resto de la economía, apenas proporciona empleo a unos 10.000 angoleños y, además, favorece la corrupción del poder⁶. No en vano, como dice Munslow (1999:551), “el petróleo y los diamantes son los pilares gemelos de la riqueza del país y las razones de su pobreza”.

En efecto, el segundo sector más lucrativo es el de la producción de diamantes, en la que ocupa el cuarto puesto mundial, que aporta aproximadamente el 9% del valor de las exportaciones (1.100 millones de dólares ya en 2000). Dado que gran parte de la explotación y exportación ha venido siendo realizada ilegalmente, los beneficios para el Estado han sido limitados, pero en los últimos años éste ha ganado un mayor control sobre estas actividades⁷.

En cualquier caso, como es lógico después de una guerra, la economía del país viene mostrando un apreciable crecimiento. En 2004, por ejemplo, el PNB creció en un 11,7%. Por su parte, el PIB per cápita en 2003 fue de 2.344 dólares, sensiblemente superior al de otros países de la región, y el doble por ejemplo de los 1.117 dólares de Mozambique (PNUD, 2005:246).

6. Un lúcido análisis de la “maldición” (*curse*) que los diamantes y, sobre todo, el petróleo representan para Angola en diferentes planos (modelo socioeconómico, sistema político, papel de los actores externos, etc.), puede verse en Hodges (2001) y Hodges (2004). Sobre el impacto pernicioso del sector petrolífero en cuanto a la falta de transparencia y rendición de cuentas del gobierno, véase Human Rights Watch (2004a).

7. Sobre la importancia del sector diamantífero puede verse Gordon (2004).

Ahora bien, a pesar de dicho crecimiento, de los cada vez mayores ingresos del Estado y del enorme potencial económico del país, lo cierto es que Angola es uno de los países con peores tasas de bienestar y mayores niveles de vulnerabilidad del mundo. No en vano, en el año 2003 ocupaba el puesto 160, de un total de 177, en la clasificación del Índice de Desarrollo Humano del PNUD (PNUD, 2005:246). Asimismo, es uno de los países con mayores niveles de pobreza, tanto urbana como rural. Según el Gobierno, en 2001 un 68% de la población vivía en situación de pobreza y un 28% en pobreza extrema. Ahora bien, la pobreza era mucho más profunda en las áreas rurales, donde el 94% de las familias la sufre, frente a un 57% de las urbanas. Una gran parte de las familias que permanecieron en zonas rurales durante la guerra retrocedió a una economía de casi subsistencia, con muy pocos vínculos comerciales con las ciudades y con el resto de la economía. Por su parte, la pobreza urbana está vinculada, sobre todo, a las sucesivas oleadas de desplazados internos por la guerra que se hacinaron en los *musseques*, arrabales de las ciudades en pésimas condiciones de habitabilidad, donde el desempleo alcanza entre el 35 y el 45% y las personas malviven con una precaria economía informal.⁸ Es interesante constatar que, pese a lo que se suponía, acabada la guerra los habitantes de los *musseques* no están retornando al medio rural. En consecuencia, la miseria urbana será un problema duradero, circunstancia que debe tener en cuenta toda estrategia orientada al desarrollo humano del país.

Las altas tasas de pobreza del país son resultado de la superposición de numerosos factores asociados a la guerra, como la destrucción y paralización de la economía, el éxodo de las zonas rurales inseguras y el colapso de los servicios sociales básicos (por el conflicto, la liberalización de la economía, la privatización de los mismos, etc.). Pero también es fruto de factores relativos a la gobernabilidad, como es el sistema político opaco y corrupto, la consolidación de una élite depredadora que acapara poder y riqueza, y la falta de responsabilidad y voluntad política del Gobierno para con las necesidades básicas de la mayoría. Prueba de ello es que el Estado apenas ha puesto en marcha programas concretos de lucha contra la pobreza (programas de empleo intensivo, redes de asistencia a los más vulnerables, etc.), como sí han hecho en otros países africanos. En febrero de 2004, el Gobierno aprobó su *Estrategia de Combate á Pobreza* para satisfacer las demandas del Banco Mundial y sin haber consultado a las organizaciones sociales, pero a este documento no le ha seguido un plan de implementación concreto y pragmático.

8. Las cifras referidas a las tasas de pobreza en Angola, así como a otras muchas dimensiones del bienestar (educación, salud, etc.), son dispares e imprecisas. En cualquier caso, una de las mejores compilaciones de información y análisis en la materia es el informe realizado en 2002 por el United Nations System in Angola.

Así pues, la mayoría de la población pobre carece de protección del Estado y la obtiene en escasa medida de las agencias de ayuda. Ha tenido que afrontar la situación por su cuenta, mediante sus propias estrategias de supervivencia y afrontamiento de la crisis (desde el uso de productos silvestres hasta el hurto de agua de canalizaciones públicas, pasando por el trueque o la prostitución). Todo ello a pesar de que la guerra, los desplazamientos de población y la urbanización han debilitado los mecanismos tradicionales de solidaridad comunitaria y apoyo mutuo.

Como decíamos, la penuria generalizada no es imputable sólo a la guerra, sino también al modelo económico y político del país. Una prueba reveladora de ello es que, además de que la pobreza es enorme, las diferencias sociales están creciendo rápidamente. El “índice Gini”, un indicador que mide la desigualdad social, ha aumentado, por ejemplo, del 0,45 en 1994-95 a un 0,51 en 2000-2001. Entre 1995 y 1998, la riqueza del 10% más rico de la población aumentó un 44%, mientras que la del 10% más pobre disminuyó un 59% (United Nations System, 2002:54-55). Significativamente, Angola tiene el nivel más alto de desigualdad entre los países productores de gas y petróleo.

En efecto, una reducida elite dirigente ligada al MPLA, que sustituyó a los portugueses tras la independencia, ha experimentado un fuerte enriquecimiento desde la implantación de la economía de mercado a partir de 1985, gracias a que su poder político y control de la administración les ha proporcionado un acceso privilegiado a los recursos, que han acaparado por diferentes mecanismos corruptos y semi-fraudulentos. Como señala Hodges (2001:171), la renta del petróleo se usa fundamentalmente para el enriquecimiento de la elite y para financiar los medios de ésta para mantenerse en el poder, basados en el clientelismo y los cuerpos de seguridad, en lugar de promover el desarrollo socioeconómico⁹.

La persistencia de la inseguridad alimentaria es otra manifestación de la vulnerabilidad de la población. Aunque la situación nutricional ha mejorado paulatinamente desde la finalización de la guerra, en la actualidad todavía hay bolsas de población padeciendo hambruna y, sobre todo, un apreciable porcentaje de población sufre inseguridad alimentaria crónica. En el conjunto de Angola, en 2003 el 31% de los niños menores de cinco años tenían un peso inferior a la media para su edad, lo que refleja una situación de malnutrición.

9. Un conocido informe de Global Witness (2002), titulado *All the Presidents' Men*, aportó evidencias de que el caos derivado de la guerra fue aprovechado por las elites angoleñas y sus socios extranjeros para apropiarse fraudulentamente de los beneficios del petróleo.

Por su parte, la situación de crisis humanitaria que asoló a gran parte del país durante la guerra ha ido superándose paulatinamente tras la conclusión de ésta. No obstante, informes recientes alertan de que todavía hoy existen poblaciones en situación de emergencia en diferentes zonas del país.

En cuanto a la salud pública, Angola sufre unas pésimas condiciones incluso para los parámetros africanos. Las principales enfermedades son las propias también de otros países de la zona, como las infecciones diarreicas, el VIH-Sida y, sobre todo, la malaria. Resulta significativo, por ejemplo, que tenga una de las tasas de esperanza de vida más bajas del continente, situada en 40,8 años en 2003 (42,3 las mujeres y 39,3 los hombres). Igualmente, tiene la segunda mayor tasa de mortalidad infantil del mundo: 260 de cada 1000 nacidos vivos morían antes de los 5 años en 2003 (tasa que parece haber bajado a 250 en 2005). Entre los principales causantes de esta situación de alta morbilidad cabe citar la malnutrición; la insalubridad y falta de higiene, especialmente en zonas periurbanas; la falta de acceso al agua potable, pues sólo un 50% de la población tenía acceso sostenible a fuentes de agua mejoradas en 2002 (PNUD, 2005:253); los bajos niveles de inmunización, en algunos casos inferiores a los de otros países africanos; el colapso de los servicios públicos de salud; la falta de asistencia de recursos entre la población para costear la asistencia y los medicamentos, progresivamente privatizados desde principios de los años 90; y el desplazamiento de la población durante y tras la guerra (que está contribuyendo a la creciente incidencia del sida).

En términos generales, las zonas del país con una situación más calamitosa (con mayor pobreza e inseguridad alimentaria) son sobre todo aquellas a las que han retornado los refugiados y desplazados, que son además las que se vieron más afectadas por la guerra. Son áreas con vías de comunicación en gran parte destruidas, con minas antipersona, servicios básicos casi inexistentes, escasa presencia de la administración del Estado y un difícil acceso para la ayuda internacional.

Los ínfimos niveles de bienestar que afronta gran parte de la población se explican, en gran medida, por las enormes deficiencias y casi abandono que caracterizan a los servicios sociales básicos. Las políticas sociales del Estado se fueron debilitando a lo largo del tiempo, debido a la guerra, los programas de ajuste estructural, y la transición a una economía de mercado, pero también debido al creciente alejamiento entre la elite gobernante y el resto de la población. Así, el gasto para servicios básicos viene representando un porcentaje muy reducido del presupuesto nacional,

sensiblemente menor que en otros países africanos, debido a que la prioridad ha sido el gasto militar¹⁰.

El problema no radica fundamentalmente en la falta de recursos, dado que, gracias al petróleo, el Gobierno angoleño dispone de más ingresos que otros muchos ejecutivos del continente. Estriba más bien en la falta de voluntad política para priorizar y universalizar a toda la población los servicios sociales básicos. De hecho, el Gobierno dejó de proveer gran parte de éstos, dejándolos en manos de ONG, iglesias y otros actores privados.

Por otro lado, cabe destacar algunos grupos sociales particularmente vulnerables, como son los refugiados retornados, los desplazados internos y los soldados de UNITA desmovilizados.

En el año 2005, el proceso de retorno de los refugiados en países vecinos se consideraba casi terminado, pues para octubre habían regresado 333.000 de un total estimado en 450.000. Lo mismo cabe decir de los desplazados internos, unos cuatro millones (30% de la población), ya que para marzo de ese año casi todos habían retornado a sus lugares de origen, se habían asentado en otros lugares o habían decidido quedarse en el lugar donde en su día se instalaron. Ahora bien, aunque el retorno esté concluido, la reintegración socioeconómica de unos y otros está viéndose dificultada por múltiples problemas, como son: las dificultades de convivencia en comunidades fracturadas por la guerra (debidas a animadversiones políticas o a disputas por el acceso a la tierra); la falta de empleo, tierra, infraestructuras y servicios básicos; y la carencia de documentos de identidad que acrediten su ciudadanía (lo que les priva de derechos y propicia abusos y violencia por parte de militares y policías). Tanto en un caso como en otro, la ayuda prestada por el Gobierno al retorno y la reintegración ha sido escasa.

Los desmovilizados de la UNITA representan unos 92.000 soldados (junto a entre 286.000 y 400.000 familiares), un volumen superior al esperado y que desbordó la capacidad de respuesta del Gobierno, a pesar de lo cual éste se hizo responsable del proceso y rechazó que las Naciones Unidas tuvieran un papel formal en él, como ha ocurrido en otros países. El Gobierno ha gestionado deficientemente el proceso de desmovilización: sus programas de ayuda han sido lentos e insuficientes, con lo que los afectados se han visto sometidos, tanto en los campos de desmovilización como después, a unas condiciones alimentarias

10. Durante los años 90, los gastos sociales representaron entre el 9 y el 22 por ciento del gasto del Gobierno. El gasto público en educación supuso el 2,8% del PIB (en 2000-2002), el de salud el 2,1% (en 2002), y el gasto militar el 4,7% (en 2003).

y sanitarias penosas. Su proceso de reintegración afronta las dificultades ya mencionadas para los refugiados y desplazados retornados, con el agravante de la hostilidad que han encontrado en muchas ocasiones por las poblaciones de los lugares donde se han asentado, habiéndose registrado diferentes episodios de violencia contra ellos¹¹.

Además de los colectivos citados, existen otros sectores particularmente vulnerables en el actual contexto de rehabilitación de Angola. Uno de ellos es el de las mujeres, cuya vulnerabilidad socioeconómica se ha visto incrementada por la guerra y el desplazamiento, la fragmentación de comunidades y familias, y el deterioro de los ingresos y de los servicios públicos (Ducados, 2004). Otro sector muy vulnerable es el de los niños y adolescentes, un colectivo muy numeroso dada la estructura demográfica del país. Por su dependencia socioeconómica y su vulnerabilidad fisiológica, los niños constituyen un grupo de riesgo al que golpean con especial virulencia la pobreza, la enfermedad o la malnutrición. En 2005, el 44% de los niños menores de diez años no estaban escolarizados. Los adolescentes, por su parte, representan un 18% de la población y son objeto de muchos problemas propios tanto de los niños como de los adultos: unos bajos niveles de escolarización y formación, la falta de perspectivas de empleo, la marginalidad y la delincuencia como medio de vida, el riesgo de contracción del VIH-Sida, etc. Las dificultades de los adolescentes y los jóvenes, y la frustración de sus perspectivas de futuro ante la lentitud de las mejoras socioeconómicas, podrían generar un peligroso caldo de cultivo de tensiones sociales (United Nations System, 2002:60-62).

Oportunidades para la democracia y el desarrollo

Como decíamos, en este período crítico para el futuro del país cabe apreciar la existencia de numerosas amenazas, así como de algunas oportunidades, para la construcción de un sistema democrático e integrador, y de un modelo de desarrollo humano más equitativo. Entre tales oportunidades, podríamos destacar las siguientes:

a) La desmilitarización de UNITA y su papel como oposición

El abandono de las armas y la conversión de UNITA en una fuerza política exclusivamente civil, por primera vez desde la independencia, marca un camino de no retorno en cuanto a la superación de la guerra. Aunque resultó dividida

11. Sobre las dificultades a la reintegración de refugiados retornados, desplazados y desmovilizados, véase Human Rights Watch (2005).

entre su línea militar, su representación en el extranjero y la llamada Unita Renovada (representada en el parlamento desde 1992), parece haberse reunificado bajo un liderazgo único. A pesar de su debilidad actual, podría actuar como catalizador de diferentes fuerzas de oposición al Gobierno, con efectos estimulantes para la democracia.

b) El crecimiento de la sociedad civil

Uno de los principales motivos de esperanza de cara al avance de la democracia y el desarrollo humano es el reciente auge de la sociedad civil independiente. Impedida históricamente por el autoritarismo, la represión y la cultura del miedo, comenzó a surgir con las reformas democratizadoras de 1991, especialmente con la aprobación ese año de la Ley de Asociaciones, y se desarrolló particularmente a partir de la reanudación de la guerra en 1998. Desde ese año, diferentes iniciativas sociales fueron conformando un movimiento a favor de una paz dialogada e integradora, en contraposición a la opción gubernamental de una victoria militar (Comerford, 2004). Aprovechando el escaso margen de actuación pública existente, la sociedad civil ha ido creciendo en cuanto al número de organizaciones sociales, muchas amparadas por la Iglesia Católica, así como a su capacidad, visión del contexto, coordinación mutua en redes y vínculos con el exterior. Ciertamente, es todavía débil, depende de la ayuda exterior y sigue limitada a la capital y algunas pocas ciudades, pero va cobrando fuerza como un actor decisivo para alentar reformas aperturistas y políticas favorables al desarrollo humano y a los derechos humanos. Así, destaca su trabajo en campos como el del acceso a la tierra, los derechos humanos, la educación cívica o la gobernabilidad.

c) La existencia de algunos medios de comunicación independientes

A partir de las reformas de 1991 se crearon algunos medios de comunicación independientes, que subsisten frente al control gubernamental de los medios públicos, aunque con serias dificultades: su libertad de expresión es limitada¹², prácticamente sólo tienen presencia en Luanda y otras pocas ciudades, y, salvo la emisora Radio Ecclesia, sólo llegan a una minoría de la población. En cualquier caso, tales medios, en especial esa emisora, han contribuido decisivamente a generar debate político y social, expresando voces críticas con el poder en alianza con organizaciones de la sociedad civil. Son por ello uno de los actores que más están contribuyendo a la ampliación del marco de libertades, la apertura política y la creación de una conciencia ciudadana.

12. Las limitaciones a la libertad de expresión y las implicaciones que esto tiene de cara a la democratización del país son analizadas en Human Rights Watch (2004b).

d) El incipiente proceso de descentralización político-administrativo

La Ley de Revisión Constitucional de 1992 contempla dos pasos que aún no se han materializado: la celebración de elecciones para nombrar autoridades locales y la aprobación de una ley sobre gobiernos locales. Sí se ha aprobado, sin embargo, un Plan Estratégico de Desconcentración y Descentralización Administrativa, que prevé la transferencia de competencias administrativas del Estado a los poderes locales. Algunas de tales competencias ya han sido transferidas a los gobiernos provinciales, aunque tanto éstos como los municipales y comunales siguen siendo dirigidos por funcionarios nombrados desde arriba, no por los ciudadanos. En suma, cabe suponer que la descentralización y las elecciones locales serán una de las principales líneas de reforma política, con varias consecuencias potencialmente positivas: mayor respeto a la diversidad del país, incremento del espacio para la participación política, movilización de recursos locales para el desarrollo, etc¹³.

e) La previsible celebración de las elecciones legislativas y presidenciales

Una vez acabada la guerra, la legitimidad del sistema político requiere la celebración de nuevas elecciones legislativas y presidenciales, dado que las últimas se realizaron en 1992, y que deberían ser un hito en el camino a la democracia y la reconciliación. Diferentes analistas consideran que el período hasta su celebración será decisivo para, con la presión de la sociedad civil y bajo el escrutinio atento de la comunidad internacional, impulsar la implementación de reformas democráticas y ganar más espacio para la participación social y para la discusión sobre los problemas de fondo del país, como los relativos a los modelos político y de desarrollo. Tras ellas, por el contrario, cabe la posibilidad de que el MPLA, ratificado en el poder, pretenda retornar a actitudes menos aperturistas.

El debate político sobre las elecciones gira en torno, principalmente, a tres temas. El primero de ellos se ha centrado en qué tarea acometer primero, la reforma constitucional o las elecciones. Cambiando su criterio inicial, el Gobierno parece haber aceptado que primero se celebren las elecciones, en las que aspira a conseguir una amplia mayoría con la que reformar la Constitución a su medida. Sin embargo, éstas no acaban por celebrarse. En efecto, un segundo debate se refiere a la fecha de los comicios, puesto que diferentes plazos previstos en los últimos años han sido después pospuestos por el Gobierno aduciendo dificultades técnicas para su celebración (necesidad de elaborar un registro de votantes, inaccesibilidad de diferentes zonas, etc.). El

13. Las potencialidades de la descentralización de cara a avanzar en el principio de ciudadanía, la democracia y el desarrollo son abordadas por Pacheco (2002).

tercer debate existente en torno a las elecciones se centra en las condiciones políticas y jurídicas necesarias para su realización. Aunque la oposición y la sociedad civil siempre han pedido que se celebren lo antes posible, también subrayan la necesidad de llevar a cabo antes un “proceso de transición” consensuado, tomando las medidas y creando las condiciones que posibiliten unas elecciones democráticas, libres y justas (superación de la identificación MPLA-Estado, reforma de las fuerzas de seguridad y del sistema de justicia, ampliación de la libertad de expresión, etc.) (Modiba, 2003:83, 89). Estas medidas no se están llevando a cabo, o sólo de forma lenta e insatisfactoria, lo que revela una falta de voluntad política del Gobierno, reforzado por su victoria militar, para instaurar un sistema democrático e integrador.

Retos y dificultades para la reconstrucción

A pesar de las oportunidades mencionadas, la rehabilitación del país con vistas a una paz duradera y a un desarrollo humano sostenible afronta numerosos retos y amenazas, que encierran un importante potencial desestabilizador. En Angola es generalizada la opinión de que no resulta factible ya una nueva guerra como las vividas en las últimas décadas. Sin embargo, no pueden descartarse en el futuro estallidos de violencia localizados, asociados sobre todo a problemas socioeconómicos (desahucios y usurpación de tierra, dificultades de reintegración de retornados y desmovilizados, aumento de la disparidades el reparto de la riqueza, etc.), pero que podrían conectarse con agravios históricos e identitarios de tipo étnico-regional, lo que les dotaría de una articulación política y podría convertirlos en conflictos armados de mayor alcance.

Así pues, Angola afronta diferentes problemas y desafíos tanto socioeconómicos como de gobernabilidad, dos ámbitos que en este país están indisolublemente vinculados. Veamos los principales.

a) Consolidación de la reintegración socioeconómica de los retornados y desmovilizados

Como hemos dicho, la reintegración socioeconómica efectiva de los antiguos refugiados, desplazados y soldados desmovilizados está afrontando dificultades, lo que está generando entre ellos sentimientos de descontento y frustración, así como tensiones con las comunidades. Para que la reintegración avance con éxito son precisas varias condiciones: un proceso de reconciliación de base y una mejor aceptación por las comunidades en las que se han asentado; mayores posibilidades de empleo, mediante la reconstrucción de las economías locales; y mejores servicios públicos básicos, que alivien sus precarias condiciones de

vida. Sin embargo, ni las inversiones públicas ni la ayuda internacional están llegando en la medida necesaria a las zonas de retorno o asentamiento, debido a varios factores que habría que superar: destrucción de infraestructuras, minas, dificultades de acceso viario vial, escasa presencia de la Administración, cierta discriminación política, etc.

b) Afrontamiento de la pobreza

La reducción de la pobreza, y con ella la de la inseguridad alimentaria, constituye uno de los principales problemas de Angola. A largo plazo, este objetivo sólo podrá alcanzarse mediante la reconstrucción y el desarrollo económico, especialmente en los sectores que pueden generar más empleo, como la agricultura familiar. Pero, además, es imprescindible implementar políticas públicas específicamente orientadas a combatir el problema, sobre todo a corto y medio plazo, centradas por ejemplo en la generación de empleo, la mejora en el acceso a la tierra, el acceso al agua y los servicios sanitarios, etc. Un factor importante a tener en cuenta es que, en Angola, un alto porcentaje de la pobreza es urbana, en mucha mayor medida que en otros países africanos. En cuanto a las medidas a tomar, el documento *Estrategia de Combate a la Pobreza*, de 2004, define las áreas prioritarias de intervención, pero luego no se ha plasmado en políticas y estrategias sectoriales concretas, de modo que la elaboración de éstas es una labor ineludible que el Gobierno debería emprender. En efecto, resulta imprescindible un mayor compromiso político del Gobierno en la lucha contra la pobreza, que debe traducirse no sólo en un incremento del gasto social, hoy escaso, sino también en una mayor iniciativa para formular y luego ejecutar (pues muchos de los existentes nunca se han puesto en práctica) programas y políticas que precisen las prioridades, los objetivos y los criterios en los diferentes sectores (planes de educación, políticas contra la pobreza, estrategias contra el sida y la malaria, la mejora del acceso al agua potable, etc.).

Por otro lado, la lucha contra la pobreza debería tener en cuenta la situación generada por algunos de los grandes desequilibrios demográficos del país, entre los que destacan los siguientes: 1) el alto porcentaje de población urbana (35,7% en 2003, aunque durante la guerra fue mayor), concentrada sobre todo en la capital, dando lugar al hacinamiento de un tercio de la población nacional en los *musseques*, grandes asentamientos periurbanos informales, en condiciones de vida miserables, sin apenas servicios básicos, malviviendo de la economía informal y sin seguridad legal en la tenencia de sus precarias viviendas; 2) el acelerado crecimiento demográfico (2,8% anual, uno de los mayores del mundo), lo que genera un alto porcentaje de jóvenes (en 2002, un 60% tenía menos de 20 años), la mayoría sin empleo ni formación, nacidos en un entorno de violencia, lo que constituye un foco de descontento y potencial

inestabilidad; y 3) la desarticulación social generada por la guerra, el desplazamiento poblacional y la fuerte urbanización, factores que han erosionado profundamente la sociedad tradicional, incluidas sus redes sociales y mecanismos de solidaridad, incrementado con ello la vulnerabilidad de gran parte de la población.

c) Reconstrucción económica orientada a un modelo de desarrollo humano equitativo

Angola afronta el formidable reto de reconstruir su actividad económica, que, con la excepción del sector petrolífero y poco más, se ha visto prácticamente destruida. La reactivación económica exige, en primer lugar, la rehabilitación de las infraestructuras físicas dañadas por la guerra, así como la reconstrucción de otras nuevas. Igualmente, la mejora en materia de comunicaciones y transporte, a fin de: eliminar la separación entre el interior y la costa (donde se concentran la mayoría de las infraestructuras), y el aislamiento de diversas zonas del interior; reestablecer un mercado de alimentos y otros productos a escala nacional; y, en particular, incrementar los vínculos campo-ciudad. El desarrollo de las comunicaciones tiene que orientarse también a conectar Angola con los países vecinos. En efecto, la integración económica regional de los países del SADC prevista para el 2008 constituye un escenario prometededor para un país con tantos recursos y potencial como éste. Igualmente importante es la eliminación progresiva y duradera de las minas antipersona y anticarro, al menos de aquellas instaladas en vías y lugares prioritarios.

Pero un reto no menos importante que el de la mera reconstrucción es el de acometer una profunda reforma de su modelo socioeconómico, para que sea más equitativo y sirva a las necesidades de desarrollo humano del conjunto de la población. Desgraciadamente, el proceso de reconstrucción que se está llevando a cabo se está centrando sobre todo en las infraestructuras físicas orientadas al sector petrolífero y otros sectores extractivos, opción que sirve fundamentalmente a los intereses de las elites y de las multinacionales extranjeras. La apuesta consiste en un modelo de desarrollo económico centrado básicamente en el crecimiento del sector petrolífero, complementado con otras actividades extractivas (diamantes, minerales y pesca). Este modelo, rentista más que productivo, sin duda seguirá reportando a corto plazo gran cantidad de divisas, pero consolidará los fuertes desequilibrios económicos, sociales y regionales, pues se limita a determinados lugares del país (principalmente Luanda, la costa y algunas ciudades) y proporciona poco empleo¹⁴.

14. Como dice Le Billon (2005:20), "La continuación de la dependencia económica respecto al sector petrolero angoleño sólo servirá para prolongar el patronazgo político".

Así pues, uno de los grandes retos consistiría en promover un modelo de desarrollo humano, más equitativo, que contribuyera a superar los desequilibrios del país y a consolidar la paz. Esto exigiría un mayor esfuerzo para la diversificación de la economía, desarrollando diferentes sectores y explotando los abundantes recursos del país. Particular atención debería prestarse a la agricultura familiar, por cuanto es el tipo de actividad con más capacidad para generar empleo masivo y facilitar la reintegración de los retornados y desmovilizados. Sin embargo, el Gobierno no parece interesado en ésta, sino en una agricultura comercial a gran escala, actividad para la cual las elites urbanas han venido apropiándose fraudulentamente de tierras durante los últimos años, en tanto que los pequeños campesinos afrontan serias dificultades en cuanto a la titularidad y uso de la tierra (Pacheco, 2004).

d) Mejora de la gobernanza y construcción de un sistema político democrático e integrador

Dada la naturaleza del conflicto, la consolidación de la paz y la reconciliación sólo serán posibles en un contexto de democracia pluripartidista e integradora de las diversas sensibilidades. Paz y democracia son inseparables. Así, resulta preciso avanzar en la transición democrática iniciada en 1991 y truncada después con la reanudación de la guerra, mediante diferentes reformas políticas y la celebración de unas nuevas elecciones. Además, la instauración de mecanismos de control democrático y el incremento de las libertades pueden contribuir a incrementar la capacidad de presión de la sociedad civil y la rendición de cuentas del Gobierno, redundando en políticas más atentas a las necesidades de la mayoría.

El principal reto en este sentido sería el de construir un Estado y una administración auténticamente nacionales e integradores, reconocidos por todos los sectores políticos y grupos étnico-regionales, con una amplia legitimidad social, y que sean capaces de liderar el proceso de reconstrucción y de desarrollo¹⁵. Esto, como hemos apuntado anteriormente, exigiría un auténtico proceso de transición democrática, con medidas como la reforma de las instituciones, la instauración de mecanismos de control democrático, la superación de la patrimonialización del Estado por el MPLA, etc. Otro reto en el ámbito de la gobernanza consiste en avanzar en el respeto y protección de los derechos humanos, algo básico para hacer efectiva la reconciliación y para reconstruir un “contrato social” entre los ciudadanos y el Estado, sobre la base de

15. Una interesante reflexión sobre los principales desafíos que afronta la reforma del Estado angoleño la ofrece Feijó (2002).

una relación de derechos y obligaciones. Particular importancia tendría la reducción de los altos niveles de corrupción y el incremento de la transparencia y del control en la gestión de la Administración y en las finanzas públicas. El Gobierno, sin embargo, es reticente a clarificar las cuentas públicas y publicar los ingresos petrolíferos, a pesar de las iniciativas internacionales a tal efecto. Los intereses de las multinacionales y la importancia estratégica que el petróleo angoleño tiene para Occidente dan lugar a que la capacidad y voluntad de presión internacional sobre el Gobierno sea limitada, y a que éste se vea apuntalado. Así pues, como concluye Sogge (2006), la situación de Angola no es fruto meramente de factores internos, sino en gran medida de las pautas existentes de gobernanza económica y política global.

En este contexto, el fortalecimiento de la sociedad civil parece un requisito para poder avanzar hacia la paz sostenible, la democracia y el desarrollo humano. Su presión social y política es la mejor garantía para emprender reformas políticas y reorientar el gasto público hacia los fines sociales. Igualmente, puede realizar una aportación decisiva a la hora de avanzar en la reconciliación social, romper la bipolarización de la política angoleña, superar la cultura del miedo y desarrollar una democracia participativa.

Sin embargo, la reforma del sistema político se ve lastrada por diferentes factores. En primer lugar, como están advirtiendo varios analistas, el hecho de que la guerra haya acabado mediante una victoria del Gobierno supone una grave hipoteca para la consecución de una paz sostenible, una democracia integradora y un modelo de desarrollo más equitativo. Si la paz se hubiera logrado mediante un proceso de diálogo sobre el modelo político y los problemas de fondo del país, incluyendo tanto a los beligerantes como a la sociedad civil, seguramente se habría abierto un proceso claro de transformaciones hacia una democracia pluripartidista, integradora y participativa (Meijer, 2004; Griffiths, 2004). Pero la paz no llegó así, sino mediante una victoria militar del Gobierno y con la exclusión de la sociedad civil, que no pudo participar ni como mera observadora en el acuerdo de Luená.

Por otro lado, los ingresos petrolíferos han dotado al Gobierno angoleño de una notable capacidad de negociación y de resistencia frente a las presiones externas: gracias a ellos puede prescindir en gran medida de la cooperación internacional, así como zafarse de las condiciones impuestas por los donantes, el Banco Mundial y el FMI relativas a las reformas económicas estructurales, el buen gobierno, la democratización o la lucha contra la corrupción. Esta autonomía financiera y política ha aumentado, además, gracias a la firma en 2004 de un crédito de 2.250 millones de dólares concedido por China

a cambio de petróleo.¹⁶ En definitiva, el Gobierno parece haber optado por financiar la reconstrucción con recursos privados, con sus propios fondos y con financiación bilateral china, renunciando a los fondos multilaterales y a un aumento de la cooperación internacional, a fin de evitar unas condiciones políticas que pueden ser lesivas para las prácticas de enriquecimiento de las elites¹⁷.

e) Ausencia de un auténtico proceso de reconciliación

Uno de los principales retos del país consiste en la consecución de una paz sostenible, entendida no como una mera firma del cese el fuego, sino como un auténtico proceso de reconciliación entre los diferentes sectores sociales que cure las profundas heridas abiertas por la guerra y afronte los problemas de fondo.¹⁸ Los acuerdos de paz de Luena y la amnistía consiguiente en absoluto satisficieron tal objetivo, puesto que consistieron básicamente en un acuerdo entre los contendientes para garantizarse mutuamente la impunidad de sus delitos.

Es dudoso que se venga avanzando en tal proceso de reconciliación de forma adecuada y al ritmo deseable. Aunque no se pueda hablar de una tensión fuerte y generalizada entre los seguidores de ambos bandos, sí han existido numerosos incidentes violentos y agresiones contra miembros y oficinas de la UNITA, como la destrucción de 80 casas de seguidores de ésta, retornados desde Zambia, ocurrida en Cazombo (Moxico) en julio de 2004.

Como se desprende de las lecciones aprendidas en otros países, un proceso de auténtica reconciliación es un camino complejo y prolongado, que exige la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población, así como la instauración de un sistema político pluripartidista, integrador de diferentes identidades, socialmente legítimo y respetuoso de los derechos humanos. Igualmente, exige conocer la verdad, reconstruir la memoria, confrontar el pasado, afrontar los daños sociales y psicológicos de la guerra, así como consensuar el futuro superando la dinámica de vencedores y vencidos.

Además, todo esfuerzo para la reconciliación y la construcción de la paz requiere el desarrollo de una cultura de paz, cívica, participativa y de los derechos humanos. El hundimiento del modelo socialista (con su búsqueda de un

16. "Angola: oil-backed loan will finance recovery projects", 3 de marzo de 2005. Disponible en www.irinnews.org.

17. La opción por los fondos privados y bilaterales, como rechazo al chantaje de las "injustas condiciones económicas y políticas" impuestas por los donantes internacionales y el FMI, fue anunciada por el presidente Dos Santos el 18 de febrero de 2005. Véase "Angola: Deciding to go it alone", 21 de febrero de 2005, en www.irinnews.org.

18. Sobre la dimensión socioeconómica de la reconciliación, véase por ejemplo Manuel (2004).

“hombre nuevo”) y la desestructuración generada por la guerra han provocado en la sociedad angoleña una fuerte crisis de valores, una pérdida del sentido de la cohesión y solidaridad social, así como una quiebra del principio del respeto a la ley. Igualmente, el autoritarismo y la violencia han generado entre los ciudadanos una todavía arraigada cultura del miedo y del silencio, que dificulta su participación política. En este sentido, la búsqueda de la reconciliación requiere crear una cultura de paz, respeto y tolerancia, basada en la idea de ciudadanía y en los derechos humanos¹⁹. Pero, igualmente, exige recuperar las pautas de convivencia y los valores destruidos por la guerra, como el sentido de la justicia y de la solidaridad social, así como moralizar la actividad pública.

Sin embargo, un proceso de reconciliación plena, con las condiciones señaladas, se ve dificultado en Angola por diferentes circunstancias, inercias y tendencias, que amenazan además la viabilidad futura de todo el proceso de pacificación y reconstrucción del país. Destacan las siguientes:

- La forma en que se alcanzó la paz. Como hemos señalado, la guerra finalizó no por la negociación y el consenso (como ocurrió por ejemplo en Mozambique), sino, en realidad, por la fuerza militar de una parte. La paz no ha sido por tanto fruto de un proceso inclusivo, pues se excluyó la participación de la sociedad civil y no se sometieron a discusión los principales problemas de fondo del país. De este modo, lo que ha ocurrido en Angola es un acuerdo entre los dos contendientes, Gobierno y UNITA, que incluye el “olvido”, una amnistía que exime a ambos de sus atrocidades y ciertas prebendas económicas para los líderes de esa organización. Todo esto contribuye a que el Gobierno no tenga urgencia, necesidad, ni clara voluntad, para emprender reformas en el sistema político.
- La pervivencia de una cultura del miedo y del silencio, que dificulta la participación ciudadana. Tal cultura es fruto de la época colonial represiva, de la guerra fratricida con una fuerte violencia ejercida sobre la población civil y de las prácticas autoritarias por parte de ambos contendientes.
- La persistencia de hondas heridas provocadas por décadas de violencia e impunidad, así como de una arraigada cultura de la violencia, en la que ésta se contempla como medio de solución de disputas. Esto se agrava por la existencia de gran cantidad de armas en manos privadas, así como de la Organización para la Defensa Civil, grupos paramilitares del MPLA, cuya pervivencia e incluso reciente refuerzo arroja dudas sobre el compromiso del régimen con la democratización y reconciliación.

19. Sobre la importancia de difundir una idea participativa de la ciudadanía, basada en principios, deberes y obligaciones, puede verse Manuel (2002).

- El incremento del malestar social y la frustración, debido a que las expectativas de mejora socioeconómica no se cumplen, la pobreza se perpetúa, los servicios básicos sólo mejoran con exasperante lentitud, y las elites sociales se enriquecen rápida y fraudulentamente.
- Las dificultades para la reintegración de los ex soldados desmovilizados de UNITA, que han recibido una escasa ayuda material y a veces no han sido bien acogidos por las comunidades, en contraste con las prebendas que han obtenido los generales de dicha organización.
- Las tensiones existentes entre partidarios del MPLA y de UNITA, en particular la animadversión de algunas comunidades hacia retornados simpaticizantes de esta última. A lo largo de 2005 se registró en las provincias un incremento de choques violentos entre ambos, en particular de asaltos a oficinas de la UNITA.

La perpetuación de las tensiones étnico-geográficas, asociadas al control del poder básicamente por algunos grupos étnicos. Es preciso tener en cuenta que el país abarca a numerosos grupos étnicos, con frecuencia enfrentados entre sí durante el período precolonial. Además, las propias guerras posteriores a la independencia fueron libradas por organizaciones cuyos principales apoyos se encontraban en diferentes grupos étnico-territoriales. El hecho de que ésta haya acabado por la victoria de una de las partes, en vez de mediante una solución pactada, no facilitará que algunas etnias puedan superar su sentimiento de marginación por parte del poder económico y político ejercido desde Luanda. En particular, existe una percepción de exclusión política en diferentes grupos sociales y étnico-regionales (sobre todo los bakongo y ovimbundos), que sólo podría superarse mediante profundas reformas en el sistema político, haciéndolo más integrador y procediendo a una descentralización administrativa o política. A esto hay que añadir la reclamación de autonomía sobre todo en provincias ricas en petróleo o diamantes, como Cabinda y las Lundas respectivamente. En una situación de falta de apertura del sistema político y de perpetuación de la pobreza para la mayoría, las reivindicaciones etno-regionales podrían servir como canalizadoras del descontento social y generar focos de tensión política e, incluso, violencia.

La incitación al odio étnico e incluso a la violencia desde diferentes medios de comunicación, por ejemplo hacia los seguidores de UNITA. Con cierta frecuencia, los medios públicos arremeten virulentamente contra todo el que desafíe al régimen.

El conflicto por el control de la tierra rural y el suelo urbano. En efecto, uno de los principales focos de tensión, presentes y futuros, radica en el proceso de usurpación de tierra por parte de sectores poderosos, para promover

explotaciones agrícolas comerciales o planes urbanísticos, lo que les representa una nueva vía de enriquecimiento que se añade al petróleo y a los diamantes. Aprovechando la carencia de títulos legales por parte de sus moradores, registran legalmente a su nombre tierras tradicionalmente explotadas por pautas consuetudinarias, a veces abandonadas durante la guerra, así como suelo urbano ocupado de facto durante décadas por asentamientos informales de desplazados. De este modo, muchos retornados a sus zonas rurales de origen se han encontrado con que las tierras de su comunidad, y de sus antepasados, ya no les pertenecen, lo que ha dado lugar a incidentes y tensiones. Igualmente, los desahucios de habitantes de barrios de la capital han provocado serios conflictos, que muchos temen puedan derivar en violencia²⁰.

Conclusiones

El proceso de rehabilitación posbélica de Angola presenta algunas peculiaridades significativas respecto a los procesos experimentados en otros países al salir de una guerra. Una de tales peculiaridades (aunque no exclusiva, pues también ha ocurrido en otros países) reside en el hecho de que la guerra no acabó mediante un acuerdo de paz consensuado por un proceso de negociación, sino básicamente por la victoria de una de las partes, por lo cual el régimen del MPLA ha consolidado su poder. Una segunda peculiaridad radica en los crecientes ingresos que el país obtiene por la exportación de petróleo, y en menor medida de diamantes, los cuales le proporcionan autonomía financiera para afrontar la reconstrucción por sí mismo, al tiempo que le convierten en un aliado necesario para EE.UU. y otros países.

Una tercera peculiaridad, derivada de las dos anteriores, radica en la escasa presencia e incidencia que la comunidad de donantes, las Naciones Unidas y las agencias financieras internacionales están teniendo en el proceso de rehabilitación angolano. En efecto, el acuerdo de paz de Luena fue negociado y firmado sin la ayuda, ni siquiera la asistencia, de observadores internacionales, del mismo modo que las Naciones Unidas apenas han tenido un papel secundario, como meras proveedoras de ayuda, en el proceso de desmovilización de la UNITA, que ha sido implementado por el Gobierno con sus propios medios. Posteriormente, el Gobierno ha renunciado a cumplir las condiciones marcadas por el FMI, el Banco Mundial y los donantes (en materia de

20. Es emblemático el conflicto generado en julio de 2001 en el Barrio de Boavista, una zona de alto valor urbanístico en Luanda, con el desalojo violento de 10.000 familias, la demolición de sus casas y su reubicación en Viana, a unos 40 kms., lejos de sus lugares de trabajo, en tiendas de campaña y sin servicios públicos. Casos similares se han repetido después, algunos de ellos abortados por la desesperada movilización vecinal.

políticas de ajuste, transparencia, lucha contra la corrupción, etc.), lo cual ha tenido importantes consecuencias: en primer lugar, no se ha llegado a convocar una “Conferencia de Donantes”, un mecanismo habitual para canalizar la asistencia internacional a los países que salen de una guerra, por lo que Angola se está viendo privada de un incremento de los fondos de ayuda para su rehabilitación; en segundo lugar, el país se está viendo también privado de los créditos concedidos en términos ventajosos por las agencias financieras internacionales, debiendo contraerlos en el mercado internacional en condiciones más gravosas. En definitiva, el régimen ha optado por afrontar la reconstrucción con sus propios fondos y con los créditos aportados por China, ignorando las reformas económicas y políticas que los donantes le demandan, por cuanto éstas dificultarían algunas de las prácticas de latrocinio que las elites realizan haciendo uso de su poder político.

En definitiva, el régimen del MPLA se siente seguro gracias a su victoria militar, los ingresos aportados por el petróleo y, también, su alianza estratégica con los EE.UU., fundamentada en las necesidades energéticas de este país. Así pues, el Gobierno no tiene ni la necesidad imperiosa ni una clara voluntad política de llevar adelante un proceso de reformas políticas y económicas, como suele ocurrir en los escenarios posbélicos. Ni siquiera parece que esté realizando esfuerzos claros para planificar el proceso de reconstrucción económica y social del país, mediante el diseño de políticas y programas para diferentes sectores orientados hacia el desarrollo, pues, no en vano, la rehabilitación se está concentrando sobre todo en la construcción de infraestructuras necesarias para sectores extractivos como el del petróleo (Vieira, 2002:57-61).

Esta actitud del Gobierno no es imputable a una hipotética falta de recursos económicos y técnicos (otros países más pobres, como Mozambique, hicieron mayores esfuerzos en sus procesos de rehabilitación), sino que responde a diferentes factores relativos a la gobernabilidad: a) la escasa necesidad de cumplir con las exigencias de los donantes internacionales, entre ellas la elaboración de documentos estratégicos para planificar la rehabilitación y el desarrollo, habida cuenta de la autonomía financiera que el régimen tiene gracias al petróleo y los diamantes; b) la disponibilidad de importantes ingresos por exportación de esos productos, que garantizan la financiación del Estado y el enriquecimiento de la elite, con independencia de la marcha de la economía del país; y c) una cierta disociación entre las elites urbanas gobernantes y el resto de la población pobre, tanto rural como urbana, que resulta en un escaso compromiso político del Estado hacia las necesidades de la mayoría, en otros términos, en la falta de un “contrato social” entre el Estado y los ciudadanos. Una posible explicación para esta actitud podría formularse como sigue: las elites de Luanda, al tener asegurados sus principales intereses con

el control de la explotación del petróleo (concentrado en la costa norte), no ven ligado su propio enriquecimiento al desarrollo del conjunto del país, menos aún del al desarrollo del interior agrícola, lo cual les lleva a mostrar una actitud negligente hacia la suerte del resto de ciudadanos y zonas.

En consecuencia, tanto las medidas democratizadoras (modificación de la Constitución, preparación de las elecciones, etc.) como la solución de los graves problemas socioeconómicos del país están resultando lentas, insuficientes y dificultosas. Así, como dice Ferreira, tras el fin de la guerra no se está constatando un “dividendo para la paz” (mejoras socioeconómicas por la reducción de los costes bélicos), sino que, por el contrario, la seguridad humana (alimentaria, sanitaria, económica, física, etc.) de la población, cuando menos, no mejora sustancialmente (Ferreira, 2005:520). Sigue predominando un ambiente de desconfianza y exclusión de los oponentes, con escaso espacio para el debate abierto. No es extraño que en amplios sectores sociales se constate un cada vez mayor nivel de malestar, desilusión y frustración.

Como vemos, orientar la rehabilitación del país hacia las metas de una paz duradera y un desarrollo humano sostenible exige afrontar múltiples problemas tanto socioeconómicos como de gobernabilidad política, dos ámbitos que en Angola están indisolublemente vinculados. Así, las perspectivas para un mayor bienestar de la población dependen en gran medida de que se implementen reformas políticas que aporten más transparencia, rendición de cuentas, participación popular y, en definitiva, instauren un sistema político más democrático e integrador. La pregunta decisiva en este período de reconstrucción posbélica es qué modelo de desarrollo socioeconómico se va a promover para el país; y, más en concreto, si la elite en el poder utilizará o no los grandes medios financieros derivados del petróleo, los diamantes y otros recursos al servicio de las necesidades y del bienestar de la mayoría de la población, esto es, para un tipo de desarrollo humano, equitativo y sostenible. Esta opción requeriría, entre otras cosas, incrementar los recursos destinados a los servicios sociales básicos, a la lucha contra la pobreza y a la promoción de la agricultura familiar, el sector con más capacidad de generar empleo y bienestar para la mayoría. Sin embargo, las tendencias parecen apuntar hacia un afianzamiento del régimen, con sus pautas depredadoras y clientelistas, así como de un modelo de desarrollo caracterizado por una economía extractiva y una sociedad muy desigual.

Frente a todos estos riesgos, cabe apreciar también la existencia de algunos pocos factores que pueden estimular cambios positivos, favorecedores de una democracia participativa y de un desarrollo sostenible y equitativo. Uno de ellos es la perspectiva de la futura celebración de elecciones, aún sin

fecha, por cuanto actúa como acicate del debate político sobre los problemas de fondo del país. Otro, el más importante, es la emergente sociedad civil independiente, en la medida en que pueda ensanchar el marco de libertades y articular las reivindicaciones de los sectores excluidos. Esta sociedad civil se perfila como el principal elemento transformador, habida cuenta de la debilidad que caracteriza a las fuerzas políticas de oposición, así como de la escasa capacidad y voluntad para presionar al Gobierno que están demostrando los países occidentales y las organizaciones internacionales.

Bibliografía

- ADAUTA DE SOUSA, Mário (2002), “Reflexões para uma estratégia de redução da pobreza para Angola”, en *Política Internacional*, nº 25, CIDEDEC, Lisboa, pp. 135-150.
- CARNEIRO, Emanuel (2002), “Angola: os desafios do futuro”, en *Política Internacional*, nº 25, CIDEDEC, Lisboa, pp. 35-42.
- COMERFORD, Michael (2004), “Alternative voices: the Angolan peace movement”, en Guus MEIJER (ed.), *From military peace to social justice? The Angolan peace process*, Accord, Londres.
- DA ROCHA, Alves (2004), “A agenda económica: as questões macroeconómicas essenciais do modelo de desenvolvimento estratégico de Angola”, en *LUCERE. Revista Académica da Universidade Católica de Angola*, nº 1, julio, Luanda, pp. 93-118.
- DUCADOS, Henda (2004), “Angolan women in the aftermath of conflict”, en Guus MEIJER (ed.), *From military peace to social justice? The Angolan peace process*, Accord, Londres.
- FEIJÓ, Carlos María (2002), “Os desafios da reconstrução do Estado e da reforma da administração pública no período pós-conflito”, en *Política Internacional*, nº 25, CIDEDEC, Lisboa, pp. 29-34.
- FERNANDES, Ana Paula (2004), *EUA e Angola: a diplomacia Económica do Petróleo*, Principia, Cascais (Portugal).
- FERREIRA, Manuel Ennes (2001), “El desarrollo y el desafío de la paz en Angola”, en *Papeles de Cuestiones Internacionales*, nº 76, pp. 107-119.
- FERREIRA, Manuel Ennes (2005), “Development and the peace dividend insecurity paradox in Angola”, en *The European Journal of Development Research*, vol. 17, nº 3, septiembre, pp. 509-524.
- GLOBAL WITNESS (2000), *A crude awakening*, Londres. (<http://www.one-world.org/globalwitness>).
- GLOBAL WITNESS (2002), *All the Presidents Men: the devastating story of oil and banking in Angola's privatised war*. (<http://www.oneworld.org/globalwitness>).

- GLOBAL WITNESS (2004), *Time for transparency. Coming clean on oil, mining and gas revenues*, Global Witness, Londres. (<http://www.one-world.org/globalwitness>).
- GORDON, Christine (ed.) (2004), *Diamond Industry Annual Review. Republic of Angola 2004*, The Diamonds and Human Security Project, Partnership Africa Canada, Ottawa, julio. (<http://www.pacweb.org>).
- GRIFFITHS, Aaron (2004), "The end of the war: the Luena Memorandum of Understanding", en Guus MEIJER (ed.), *From military peace to social justice? The Angolan peace process*, Accord, Londres.
- HODGES, Tony (2001), *Angola from afro-stalinism to petro-diamond capitalism*, James Currey, Oxford.
- HODGES, T. (2003), *Angola. Anatomy of an oil state*, James Curry, Oxford.
- HODGES, Tony (2004), "The role of resource management in building sustainable peace", en Guus MEIJER (ed.), *From military peace to social justice? The Angolan peace process*, Accord, Londres.
- HUMAN RIGHTS WATCH (2004a), *Some Transparency, No Accountability: the Use of Oil Revenue in Angola and its Impact on Human Rights*, Vol. 16, nº 1(A). (<http://www.hrw.org/reports>)
- HUMAN RIGHTS WATCH (2004b), *Unfinished democracy: media and political freedoms in Angola*, A HRW Report, 14 de julio. (<http://www.hrw.org/reports>)
- HUMAN RIGHTS WATCH (2005), *Coming home. Return and reintegration in Angola*, vol. 17, nº 2(A), marzo, Londres. (<http://www.hrw.org/reports>)
- LE BILLON, Philippe (2001), "Angola's political economy of war: the role of oil and diamonds, 1975-2000", *African Affairs*, nº 100, pp. 55-80.
- LE BILLON, Philippe (2005), "Aid in the Midst of Plenty: Oil Wealth, Misery and Advocacy in Angola", en *Disasters*, vol. 29, nº 1, pp. 1-25.
- MANUEL, Adão Avelino (2002), "A sociopatologia da cidadania angolana", en *Política Internacional*, nº 25, CIDEAC, Lisboa, pp. 9-15.
- MANUEL, Adão Avelino (2004), "A vertente social de reconciliação Nacional", en *LUCERE. Revista Académica da Universidade Católica de Angola*, nº 1, julio, Luanda, pp. 151-180.
- MEIJER, Guus (2004), "Introduction: lessons from the Angolan `peace process'", en Guus MEIJER (ed.), *From military peace to social justice? The Angolan peace process*, Accord, Londres.
- MESSIANT, Christine (2004), "Why did Bicesse and Lusaka fail? A critical analysis", en Guus MEIJER (ed.), *From military peace to social justice? The Angolan peace process*, Accord, Londres.
- MESSIANT, Christine (2004), "Angola. Desgracia para los vencidos", en WEISSMAN, Fabrice (ed.), *A la sombra de las guerras justas. El orden internacional y la acción humanitaria*, Icaria, Barcelon, pp. 105-126.

- MODIBA, Sammy (2003), "Human rights and democracy building", en OSI-SA, *Angola. Human Development Opportunities and Threats. A Programme of Action*, The Open Society Initiative for Southern Africa, Bramfontein (Sudáfrica), pp. 70-91.
- MUNSLOW, Barry (1999), "Angola: the politics of unsustainable development", *Third World Quarterly*, vol. 20, n° 3, pp. 551-568.
- PACHECO, Fernando (2002), "Caminhos para a cidadania: poder e desenvolvimento a nível local na perspectiva de uma Angola nova", en *Política Internacional*, n° 25, CIDEDEC, Lisboa, pp. 43-50.
- PACHECO, Fernando (2004), "The land issue in the context of peacebuilding: development or conflict?", en Guus MEIJER (ed.), *From military peace to social justice? The Angolan peace process*, Accord, Londres.
- PARSONS, Imogen (2003), *Reconstructing Angola*, Global Insight, n° 28, Institute for Global Dialogue, octubre.
- PNUD (2005), *Informe sobre desarrollo humano 2005*, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible en Internet: <http://www.undp.org>
- SHAW, Mark (2001), *War without end? The political economy of internal conflict in Angola*, Working Paper, n° 6, Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'. Disponible en internet: <http://www.clingendael.nl/cru/pdf/shaw.pdf>
- SOGGE, David (2006), *La "buena gobernanza" global también es necesaria*, Documento de Trabajo, n° 23, FRIDE, Madrid (<http://www.fride.org>)
- TVEDTEN, Inge y Aslak ORRE (2003), *Angola 2002/2003 - Key development issues and democratic decentralisation*, CMI Report R 2003:10, Chr. Michelsen Institute, Bergen (Noruega).
- UNITED NATIONS SYSTEM IN ANGOLA (2002), *Angola. The post-war challenges. Common Country Assessment 2002*, Resident Coordinator Unit, Luanda.
- VIERA LOPES, Filomeno (2002), "A situação económico-social de Angola e os desafios da reconstrução", en *Política Internacional*, n° 25, CIDEDEC, Lisboa, pp. 51-63.